

El Atrato: La crisis se agrava, urgen medidas integrales.

La Oficina del Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alertan sobre el inminente riesgo de una tragedia humanitaria en el Medio Atrato debido al deterioro que viven las comunidades que habitan este municipio del departamento del Chocó como resultado de la confrontación armada.

Tres años después de la masacre en Bojayá, donde murieron 119 personas, la situación para los habitantes de la zona sigue siendo crítica. El panorama es hoy aún peor que el registrado hace un año, cuando se alertó sobre el desplazamiento de varias comunidades producto de la acción de los grupos armados ilegales en la zona.

Las agencias firmantes están particularmente preocupadas por:

.- El desplazamiento de más de 2 mil personas durante las últimas 6 semanas, de las cuales la mitad son niños y niñas. Estos desplazados buscaron refugio en el casco urbano de Bellavista, donde la población permanente se estima en 1.300 personas. Solo el pasado fin de semana, unas 250 personas abandonaron la comunidad Pogue. Tomando en cuenta que ya había en Bellavista cerca de 400 personas desplazadas desde finales del 2003, podemos estimar en cerca de 2400 la población total desplazada en este municipio.

.- El grave riesgo que enfrentan unos 4.000 indígenas Embera - pertenecientes a 24 comunidades que viven a largo de los ríos Cuia y Bojayá -, por la presencia de grupos armados ilegales que han generado una situación de inseguridad dificultando así el desarrollo de sus actividades más básicas.

.- La precaria situación de salud e inseguridad alimentaria, de hacinamiento y el riesgo de reclutamiento forzado que afronta diariamente la población desplazada.

.- La ausencia de clases en las escuelas del municipio de Bojayá desde el mes de febrero, como consecuencia de la situación generada por el desplazamiento, afecta en la actualidad a más de 600 niños.

.- Las continuas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional

humanitario a que son sometidas las poblaciones que residen en esa zona.

Desde la tragedia de mayo de 2002, la situación ha continuado deteriorándose; entre otros hechos graves se puede mencionar:

.- 8 desplazamientos masivos forzados, donde cerca de 10.000 personas se vieron afectadas. Varias de las comunidades desplazadas retornaron para luego verse obligadas a desplazarse de nuevo.

.- Numerosos asesinatos selectivos.

.- El Sistema de Alerta de Temprana de la Defensoría del Pueblo emitió un informe de Riesgo en octubre 20 de 2003 con 5 notas de seguimiento. Por su parte el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT, emitió la alerta temprana el 6 de febrero de 2004 con 2 prórrogas, sin que la situación humanitaria haya mejorado. Alerta Temprana que se suma a las que se encuentran vigentes para los municipios de Sipí, Medio Atrato, Istmina y San José del Palmar.

A pesar de esfuerzos realizados en la zona por atender a la población, se requieren ahora, urgentes esfuerzos adicionales e integrales por parte del Estado para poner fin a esta lamentable situación que se está agravando.

Las agencias firmantes urgen al Gobierno y a las autoridades estatales, a que presten atención a esta alerta y adopten las acciones necesarias para prevenir nuevos desplazamientos y proteger a la población civil. Así como a que amplíen la cobertura y la duración de las medidas para atender a la población desplazada.

Las agencias firmantes exigen a las FARC-EP y a los grupos paramilitares presentes en la zona a abstenerse de toda acción que ponga en riesgo la vida y la integridad de la población civil.

Las agencias firmantes hacen un llamado general a todos los que participan en las hostilidades en el marco del conflicto armado interno a respetar integralmente el derecho internacional humanitario y a respetar la labor de todos los trabajadores humanitarios.

BOG/UNS/12